# Resumen Ejecutivo

El desarrollo de las PYMEs es una clara prioridad para las autoridades responsables de formulación de políticas públicas en América Latina y el Caribe, incluyendo las siete economías evaluadas en el presente estudio (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, y Uruguay). Esto no resulta sorprendente, ya que la gran mayoría (99.5%) de las empresas de la región son PYMEs, y casi nueve de cada 10 compañías son clasificadas como microempresas, y las PYMEs son importantes generadores de empleo a nivel regional (60% del empleo productivo formal). Sin embargo, aunque es un fenómeno global normal que las PYMEs muestren niveles de productividad más bajos que las grandes empresas, las PYMEs latinoamericanos sufren una brecha de productividad particularmente significativa, en vista de que representan sólo una cuarta parte del valor de la producción total de la región. Esta diferencia es particularmente importante en el caso de las empresas de menor tamaño: las microempresas latinoamericanas representan alrededor del 3.2% de la producción, mientras que en Europa aportan seis veces más (20% del PIB) a pesar de que tienen una participación similar en términos de la fuerza laboral que emplean. Además, todos los países participantes en este informe tienen que hacer frente a la presencia de un gran sector informal como parte integral de la estructura económica y del sector PYME, con amplias repercusiones en el desarrollo social y económico de la región.

Por consiguiente, los siete países han identificado el crecimiento económico, la formalización y la diversificación como principales objetivos de sus políticas PYME en los últimos años, en concordancia con los planes de desarrollo nacional. Esto se hace cada vez más pertinente en la medida en que aumentan los ingresos y disminuyen las barreras comerciales, lo cual abre nuevas oportunidades para producir bienes y servicios. No obstante, otros objetivos, como la generación de empleos y la reducción de la pobreza y la desigualdad, también son relevantes, lo que requeriría un marco de política para PYMEs que incida sobre diversos segmentos de la población de PYMEs a través de varias iniciativas.

En este contexto, el presente informe examina el panorama de políticas para el desarrollo de las PYMEs, identifica potenciales brechas y ofrece recomendaciones. A pesar de la notable heterogeneidad, según se detalla para cada uno de los perfiles de país, los siete países han acumulado una significativa experiencia en materia de políticas PYME y han establecido marcos institucionales altamente articulados. Además, han desarrollado orientaciones estratégicas en políticas PYME en cuanto a desarrollo productivo a mediano plazo y planes de competitividad, así como instituciones operativas con directivas horizontales y específicas. En el plano horizontal, han dado prioridad a las medidas para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, incluso mediante el uso generalizado de servicios de gobierno electrónico. En el plano de apoyos específicos, se han centrado en medidas para mejorar la productividad y la innovación, con objetivos generales como reducir la dependencia de las materias primas y el petróleo, desarrollar manufacturas avanzadas y actividades de servicios, promover mejoras tecnológicas y profundizar la integración en cadenas de valor regionales y globales.

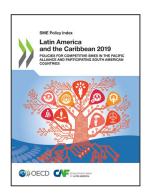
Aunque el enfoque estratégico está suficientemente articulado, cuando se trata de la aplicación en la práctica, la sofisticación de los mecanismos de implementación varía y los objetivos generales

suelen ser bastante ambiciosos en lo referente a las herramientas a disposición de las instituciones responsables. Además, la medición de la efectividad de las políticas a través del monitoreo y evaluación es un área particularmente débil. Si bien los objetivos generales a menudo han sido claramente definidos, las implicaciones para las políticas en términos de objetivos específicos y metas medibles no siempre han sido completamente desarrolladas. Esto es particularmente importante porque, aun cuando las puntuaciones del Índice de Políticas PYME muestran un sólido nivel de implementación de las políticas, el impacto real de estos esfuerzos programáticos en muchos casos queda por verse.

Sobre la base de estos resultados, el informe hace las siguientes recomendaciones generales clave para fortalecer la formulación de políticas para PYMEs como una herramienta para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo productivo:

- Garantizar un enfoque integrado hacia las políticas PYME mediante el cual las intervenciones sean estratégicas, secuenciadas y coherentes con el fin de aumentar el impacto de las intervenciones y los programas. La mayoría de los países persigue una mezcla objetivos de competitividad y de política social en sus políticas PYME. Lograr un equilibrio eficaz requiere el diseño y aplicación de programas dirigidos a diferentes segmentos de la población de las PYMEs, así como gestionar una gama más diversa de iniciativas, invertir más recursos y participar en un diálogo más amplio con varias categorías de PYMEs. Si bien dicho enfoque está orientado hacia la transformación productiva, también se deben identificar las tipologías específicas de empresas, sectores y áreas productivas. Los mecanismos de retroalimentación y coordinación entre gobierno central y local también podrían mejorarse en muchos países, ya que pueden aclarar los objetivos y facilitar la puesta en práctica.
- Prestar atención a las buenas prácticas para la formulación de políticas durante todo el ciclo de la política (desde el diseño, adopción y aplicación hasta el monitoreo y evaluación) con el fin de contribuir a asegurar que el apoyo responda a las necesidades de las empresas. Este propósito requerirá el desarrollo de planes de acción interministerial más robustos vinculados a documentos estratégicos y a la introducción de indicadores orientados mayormente al rendimiento. Esta recomendación es de especial importancia, ya que muchos países están entrando en una fase de renovación o revisión de sus planificaciones estratégicas. Se debe dar prioridad a la definición de los mecanismos de coordinación política; asegurar la coherencia entre objetivos, instrumentos de política y asignaciones presupuestarias; e integrar esquemas de evaluación de impacto desde el principio. Un esquema sistemático de evaluación de impacto puede ayudar a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, y puedan informar el diseño de futuras políticas. Las consultas entre los sectores público y privado también deberían institucionalizarse a lo largo del ciclo de política; además la representación del sector privado también podría ampliarse significativamente en la mayoría de los casos, a fin de incluir a las organizaciones que representan todo el espectro de la población de las PYMEs.
- Fortalecer los mecanismos de implementación para un mayor involucramiento de los segmentos beneficiarios de la población PYME. Esto debería incluir una revisión del sistema de convocatorias, que es ampliamente utilizado en la región, incluyendo sus procedimientos y mecanismos de aplicación, así como una experimentación con sistemas más directos para la gestión de los programas de apoyo público, incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas. También deberían revisarse los mecanismos institucionales para definir y separar las responsabilidades para la formulación y la aplicación de las políticas con mayor claridad. Esto podría conducir a la creación de organismos

- especializados en el desarrollo de las PYMEs, que puedan ser más eficaces en la comunicación con el sector empresarial y tener más flexibilidad operativa que los departamentos ministeriales.
- Vincular el apovo a PYMEs específicas con mejoras continuas en el entorno empresarial en general. Los resultados de la evaluación para esta dimensión de política son relativamente débiles en comparación con los de otras dimensiones. En general, esto significa que el apoyo específico que se proporciona a las PYMEs en otras áreas (como la innovación, la asociatividad y la internacionalización) funciona dentro de un entorno de negocios por debajo de lo óptimo en general, enfrentando grandes barreras para la entrada de las empresas y su competencia. En particular, la reforma regulatoria y el establecimiento de ventanillas únicas todavía están en una fase temprana, y los procedimientos para iniciar un negocio y declarar impuestos siguen siendo problemáticos. Es importante recomendar que los países consideren este panorama general y encuentren la combinación óptima de políticas entre mejorar el entorno empresarial general y proporcionar apoyo continuo y selectivo a las empresas con alto potencial de crecimiento.
- Aumentar la disponibilidad de información consolidada y de fácil acceso para aumentar la concienciación y entendimiento sobre la oferta de apoyo existente entre las partes interesadas. En general, se dispone de una amplia variedad de programas para los diferentes tipos de emprendedores y PYMEs, pero la disponibilidad de información útil sobre estos programas (incluyendo las descripciones de las actividades, los objetivos, la manera de participar y los resultados) varía en gran medida y la información a menudo resulta escasa o incompleta. Cuando existe información de alta calidad, a menudo se encuentra dispersa entre varios sitios Web, lo cual representa un desafio comprensible debido a la gran cantidad de actores públicos que están trabajando en áreas relevantes de las políticas para las PYMEs. La creación de plataformas en línea dedicadas a proporcionar información sobre la oferta de apoyo público integral para las PYMEs, así como la ampliación de las oficinas regionales con materiales impresos y personal dedicado a este mismo objetivo, podría ser mecanismos útiles para aumentar la utilización y el impacto de la amplia gama existente y disponible de apoyo público para las PYMEs.



#### From:

## Latin America and the Caribbean 2019

Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and Participating South American countries

## Access the complete publication at:

https://doi.org/10.1787/d9e1e5f0-en

## Please cite this chapter as:

OECD/CAF Development Bank of Latin America (2019), "Resumen Ejecutivo", in *Latin America and the Caribbean 2019: Policies for Competitive SMEs in the Pacific Alliance and Participating South American countries*, OECD Publishing, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/6f5da2a4-es

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.

